



Proceso	Ejecutivo conexo
Demandante	Gustavo Alberto Castro y otros
Demandado	Carlos Arturo Ruiz Castillo
Radicado	No. 05360-31-03-001-2017-00193-02
Procedencia	Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí
Instancia	Segunda
Ponente	Luís Enrique Gil Marín
Asunto	Sentencia No. 018
Decisión	Confirma
Tema	Títulos ejecutivos
Subtemas	Cosa juzgada. Efectos de la cosa juzgada. Jurisprudencia. Fijación honorarios auxiliares de la justicia.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL

Medellín (Ant.), treinta de junio de dos mil veintitrés

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ITAGÜÍ**, en el proceso ejecutivo conexo instaurado por el secuestre designado doctor **GUSTAVO**

AMAYA YEPES, en favor de los señores **GUSTAVO ALBERTO CASTRO VALENCIA, BEATRIZ ELENA ACEVEDO MONCADA y MARÍA ALEJANDRA GÓMEZ VARGAS** y en contra del señor **CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO**.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones: Los demandantes solicitan se libre mandamiento de pago a su favor y en contra del demandado por \$295.000.000,00 como capital, más los intereses de mora desde que la obligación se hizo exigible; por último, solicitan se condene en costas al ejecutado.

Elementos fácticos: El demandado y la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, celebraron un contrato de transacción comercial, donde pactaron que el señor Ruiz Castillo le pagaba a la señora Palacio Moreno \$400.000.000,00; de los cuales quedó un saldo pendiente por cancelar \$295.000.000,00, pagaderos en 3 cuotas de \$98.333.334,00, cada una, los días 25 de octubre, 25 de noviembre y 25 de diciembre de 2006; esta obligación no ha sido cancelada a pesar que es clara, expresa y exigible; finalmente, afirman que el crédito por \$295.000.000,00 se encuentra embargado y secuestrado para el proceso radicado No. 2006-00423, adelantado por Gustavo Castro, Beatriz Acevedo y María Alejandra Gómez.

Mandamiento de pago: Se libró el 07 de junio de 2019; una vez notificado al demandado, replicó la demanda, se

opuso a las pretensiones y formuló las siguientes excepciones: ***(i) cosa juzgada que declaró la inexistencia del título ejecutivo con el que se demanda y dejó sin piso la obligación de cancelar la obligación que dependía del cumplimiento de la transacción; (ii) prescripción; (iii) inexistencia de la obligación de pagar el crédito constituido en la transacción y, (iv) no contener el documento argüido como título ejecutivo una obligación clara, expresa y actualmente exigible.***

Sentencia: Se profirió el 11 de junio de 2021, con la siguiente resolución:

"Primero: DECLARAR PROBADA la excepción de FALTA DE CLARIDAD de la obligación, conforme con lo expuesto en la parte motiva.

"Segundo: Como consecuencia de lo anterior, CESAR la presente ejecución.

"Tercero: Levantar las medidas cautelares declaradas (sic) en contra del demandado.

"Cuarto: Condenar en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por Secretaría, dentro de las que se incluye por concepto de agencias en derecho el equivalente a dos millones de pesos (2.000.000.00) conforme lo expuesto.

"Demandante: Solicita aclaración de la condena en costas: Se aclara que es a cargo de los demandantes: Gustavo Alberto Castro Valencia, Beatriz Elena Acevedo Moncada y María Alejandra Gómez Vargas".

Con apoyo en la jurisprudencia refiere a la facultad que tiene el fallador al momento de dictar sentencia, de volver sobre el cumplimiento de los requisitos de los títulos allegados como base de la ejecución; precisa que en este caso, se debe tener presente que por sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, en el proceso ejecutivo radicado No. 2008-00172, promovido por la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, en contra del señor Carlos Arturo Ruiz Castillo y que se adelanta ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín; al desatar el recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, en torno al contrato de transacción, que igualmente se trajo como título ejecutivo en este proceso de ejecución, determinó que la obligación demandada para el pago de la suma de \$295.000.000,00, no es clara y ordenó cesar la ejecución.

Frente a la excepción de prescripción, propuesta por el ejecutado y que se fundamenta en el hecho de que para la fecha de presentación de la demanda por parte del secuestre, ya había transcurrido el término de cinco (5) años con que contaba para esos efectos; advierte que el secuestre fue nombrado en el proceso radicado No. 2006-00423, por auto del 08 de mayo de 2008, notificado por estados el 12 de los mismos, mes y año y tomó posesión el 26 de junio adiado; además, se debe tener presente que el crédito por

\$295.000.000,00, a favor de la ejecutada Gloria Nelly Palacio Moreno y a cargo del señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, sobre el cual se decretó la cautela, fue objeto de la decisión proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en el proceso promovido por la señora Gloria Nelly Palacio Moreno en contra del señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, que se adelanta ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín; para efectos de los requisitos de la cosa juzgada, se verifica que en ambos procesos funge como demandado el señor Carlos Arturo Ruiz Castillo y los demandantes son diferentes; siendo evidente que frente al título allegado como base del recaudo ejecutivo, con fuerza de cosa juzgada, la jurisdicción ordenó que no cuenta con el requisito de claridad; razón por la cual, la orden de apremio librada en el presente asunto con base en dicho documento, carece de soporte alguno, porque se decidió que el documento adosado como título ejecutivo adolece de uno de los requisitos a que se contrae el art. 422 del C.G.P.; puesto que carece de claridad.

Si bien, al inicio de la contienda se libró mandamiento de pago al considerar que cumplían con los requisitos legales; tal aspecto fue debatido a lo largo del proceso, porque el documento contentivo del contrato de transacción base del recaudo, fue desestimado por la jurisdicción como título ejecutivo por no contener una obligación clara. Al respecto el Tribunal concluyó:

“Teniendo en cuenta en primer lugar, que según lo anotado, la “transferencia del dominio de los pagarés” como fue indicado, puede entenderse como la facultad de cobro en el

señor Carlos Ruiz de los citados pagarés, aunado a que los entregados superan lo debido según el acta y no solo ello, sino el compromiso de trabajar en la reactivación de la empresa y lo más importante, que si dicho pago se considera como un resarcimiento de perjuicios por las relaciones con ESMAFLEX, es dicha empresa y no el demandado el obligado a sufragar dicho pago, máxime que entre los citados ESMAFLEX, Carlos Ruiz y Gloria Palacio existían relaciones comerciales que según se indicó no fueron canceladas, lo que conlleva a concluir la falta de claridad en la obligación pretendida, por ende, no puede predicarse incumplimiento en tal sentido y si no hay crédito declarado en dicho documento que constituya una obligación pendiente de pago en cabeza del demandado, resulta imposible jurídicamente la existencia de un título con mérito ejecutivo, que sirva de fundamento y prueba suficiente para el éxito de las pretensiones del actor”.

Así las cosas, resulta claro que al no existir título ejecutivo que contenga el crédito objeto de cautela a favor de la señora María Nelly Palacio Moreno; no puede exhortarse la prescripción de un documento que no constituye título alguno; razones por las cuales es necesario ordenar cesar la ejecución, dado que el crédito objeto de medida previa, no tiene sustento alguno porque ya la jurisdicción resolvió de fondo sobre los defectos que contenía el contrato de transacción comercial base de la ejecución; contrato que acorde con lo ordenado carece de mérito ejecutivo; lo que forzosamente determina la suerte del presente cobro.

En relación con la conducta procesal de la parte demandada porque no dio a conocer al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, la medida cautelar que pesaba sobre el crédito a favor de la demandante en dicho proceso; advierte que, dicho actuar no deja entrever una conducta de fraude a ley porque en el proceso 2006-00423, que se adelantó en este mismo Juzgado, la parte actora informó que existían obligaciones a cargo de la señora Gloria Nelly Palacio Moreno; aspectos que no resultan de recibo en virtud de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Medellín, reseñada líneas atrás; siendo ese el escenario donde se tenían que debatir tales circunstancias, porque en el proceso radicado No. 2006-00423, no resultaba procedente; además, el silencio ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, en relación a las medidas cautelares decretadas sobre el crédito objeto de cobro, correspondió a una estrategia de defensa, porque se pretendía desconocer dicha obligación.

Apelación: Lo interpuso el extremo activo, quien dentro de los tres (3) días siguientes esgrimió los siguientes reparos: el Juzgado acogió en su integridad la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal, en el proceso que adelantó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín; cuando el título con el que se promovió la demanda contra el señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, fue embargado por este Despacho y por sustracción de materia, no se podía demandar; siendo asaltado por las partes en su buena fe el Juzgado Cuarto Civil del Circuito; pero una vez detectada la infracción o posible punible, no se puede premiar a los infractores desestimando las pretensiones de la demanda; amén, que el expediente fue

extraviado para que no quedara constancia del embargo del crédito, la notificación y aceptación de la obligación; al contrario de lo señalado por el Juzgado, sí existe una obligación clara, expresa y exigible, porque cuando el crédito fue embargado y se notificó la medida al aquí ejecutado, éste se comprometió a cancelar las obligaciones en la forma pactada, ya que eran pagaderas por mensualidades; vencido el plazo, la obligación se hizo exigible y una vez requerido el ejecutado para que consignara los dineros no lo hizo y, era en ese momento donde tenía que informar al Despacho que no depositaba los dineros porque la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, incumplió el contrato; solo después de tratar de realizar una cesión del crédito que no funcionó, pretenden burlar la justicia con otra demanda con base en el título embargado y presentada en el año 2008 ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín.

Señala el Juzgador de primer grado, que no era posible rebatir la obligación en el proceso radicado No. 2006-00423, que se adelanta contra la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, lo que no es cierto, porque al embargar el crédito el deudor pudo señalar que pagaba o no la obligación, dando la respectiva explicación; el meollo del asunto consiste en el embargo y secuestro de un crédito personal a favor de la señora Gloria Nelly Palacio Moreno y a cargo del señor Carlos Arturo Ruiz Castillo por \$295.000.000,00; el deudor una vez notificado de la medida informó al Juzgado que cancelaría las cuotas a medida que se cumpliera el plazo; lo que no hizo, siendo requerido en múltiples ocasiones para que lo hiciera; si la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, no cumplió con lo

pactado en el acuerdo transaccional, el aquí demandado lo debió informar al Juzgado para justificar la no consignación de los dineros; incluso, cuando se presentó el incidente de cesión del crédito que no prosperó por falta de firma del deudor Carlos Arturo Ruiz Castillo, tampoco aludió a dicho incumplimiento; lo más grave es que fue demandado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, por el mismo crédito objeto de embargo y secuestro y allí no dio cuenta de ello, llegando hasta las últimas consecuencias; lo que evidencia un fraude a resolución judicial, tal como lo advirtió el Juzgado cuando lo sancionó por no consignar los dineros a órdenes del Despacho. Ahora, la discusión se centra en determinar si el crédito embargado presta mérito ejecutivo, para lo cual se debe estar a lo previsto en los arts. 430 y 593 del C.G.P.

Además, para desatar este conflicto, resulta de suma importancia el interrogatorio de parte al deudor y lo manifestado por los testigos Jorge Martínez y Francisco Barrientos; quienes conocieron al señor Carlos Arturo Ruiz Castillo y se reunieron en la empresa ESMAFLEX con la señora Gloria Nelly Palacio Moreno y el deudor, quien recibió la empresa como parte de pago y se comprometió a cancelar a la señora Palacio Moreno \$400.000.000,00. El testigo Jorge Martínez afirmó que visitó al demandado en su oficina ubicada en la calle 33 y allí notificó el embargo del crédito y éste lo envió donde el abogado Oscar Darío Pérez, con quien se entrevistaron ambos testigos y les mostró el memorial que presentaría al Juzgado aceptando pagar la deuda en los plazos convenidos; lo extraño es que el accionado en el

interrogatorio manifiesta no conocer a los deponentes ni haberse enterado de la existencia del embargo del crédito y del proceso que se adelanta contra la señora Gloria Nelly Palacio Moreno; cuando su abogado intervino en dicha actuación aportando el respectivo poder.

Una vez se reconstruyó el expediente, en forma increíble, el Juzgado negó el mandamiento de pago, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín; la orden de apremio fue notificada al ejecutado, quien no interpuso recurso alguno para discutir el título como lo manda el art. 430 del C.G.P.; no se entiende cómo es posible, que el contrato de transacción comercial que contenía el crédito embargado y secuestrado y que hacía parte del expediente que se extravió y se reconstruyó, se aportó como base del recaudo ejecutivo para iniciar el proceso ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín; además, el demandado al proponer las excepciones no manifestó que ese documento hacía parte de un proceso que se tramitaba en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí y que el crédito que contenía había sido embargado y secuestrado; lo que conlleva un fraude a resolución judicial; no se puede validar jurídicamente que el extremo pasivo pretenda enervar la presente acción ejecutiva, allegando la decisión de segundo grado proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, en el proceso que se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, donde se dispuso que ese documento no prestaba mérito ejecutivo. Por estas razones, solicita se revoque la sentencia de primer grado y, en su lugar, ordene seguir adelante con la ejecución; además, se

fijen sus honorarios como auxiliar de la justicia, toda vez, que el Juzgador de primera instancia omitió tasarlos.

Al descorrer el traslado concedió en segunda instancia para sustentar el recurso de apelación, en síntesis, el recurrente volvió sobre los argumentos que vienen de extractarse.

Por su parte, el extremo pasivo dentro del término del traslado, señala que como lo afirma el recurrente, el título base de recaudo, tanto en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito como del presente proceso es el mismo, lo que fundamenta la excepción de *“cosa juzgada que declaró la inexistencia del título ejecutivo con que se demanda”*; al efecto, allegó copia de la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso radicado No. 004-2008-00172-00 que se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, que declaró *“imposible jurídicamente la existencia de un título con mérito ejecutivo, que sirva de fundamento y prueba suficiente para el éxito de las pretensiones del actor”*; el aquí demandante fungió como secuestre del título ejecutivo y pretende cuestionar una decisión en firme; que incluso fue atacada a través de una acción de tutela que se resolvió desfavorablemente; por estas razones solicita, se confirme la sentencia de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

Problemas jurídicos: El recurso de apelación de cara a la sentencia de primer grado plantea el siguiente problema

jurídico que la Sala debe resolver: ¿se debe ordenar continuar adelante con la ejecución?

El disenso: Señala el recurrente que el Juzgado acogió en su integridad la decisión proferida en segunda instancia por el Tribunal en el proceso ejecutivo promovido por la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, contra el aquí demandado Carlos Arturo Ruiz Castillo, que se adelantó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín y donde se allegó como base del recaudo ejecutivo el contrato de transacción comercial, que a la vez es objeto de cobro en el presente asunto; crédito embargado y secuestrado en el proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado de conocimiento por el señor Gustavo Alberto Castro Valencia, contra la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, radicado No. 2006-00423, no siendo procedente la formulación de una nueva demanda ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, porque el crédito objeto de ejecución se embargó y secuestró en el proceso radicado No. 2006-00243; a raíz de que el señor Carlos Arturo Ruiz Castillo no consignó a órdenes del Juzgado el valor del crédito objeto de cautela, se inició la presente ejecución y, por sustracción de materia conlleva la imposibilidad de volver a demandar el pago del mismo crédito; situación que no se puso de presente ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, ni por la demandante Gloria Nelly Palacio Moreno, ni por el demandado Carlos Arturo Ruiz Castillo; lo que evidencia un posible fraude a resolución judicial.

En primer lugar, cabe recordar y dilucidar que en la ejecución que se adelanta ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de

Itagüí, por el señor Gustavo Alberto Castro Valencia, contra la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, radicado bajo el No. 2006-00423, el demandante fue designado como secuestre del crédito objeto de la medida ejecutiva y que el señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, adeudaba a favor de la señora Gloria Nelly Palacio Moreno y como el deudor (Carlos Arturo Ruíz Castillo), a quien se le notificó el embargo no lo pagó, dio lugar a que se iniciara este proceso ejecutivo conexo en su contra por el secuestro y que es objeto de esta controversia.

En segundo lugar, y para entrar a desatar la instancia, tenemos, que como anexo del escrito de excepciones se trajo copia de la sentencia proferida por la Corporación, el 23 de julio de 2014, en el proceso ejecutivo promovido por la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, contra el señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, radicado No. 05001-31-03-004-2008-00172-03 y que en primera instancia se tramitó en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín; entre otras consideraciones, expuso el Tribunal:

“Como se dejó enunciado y en lo que corresponde al análisis que debe resistir un documento para determinar si cumple con los requisitos del título ejecutivo, el documento que contiene el acuerdo de transacción, estipuló como obligaciones en concreto las antes referidas, de lo cual puede colegirse, dada la prueba recogida, que tanto la señora GLORIA PALACIO como el señor CARLOS RUIZ, prestaban dinero a la sociedad ESMAFLEX y así mismo, el señor Ruiz ahora demandado, entregó a la demandante una suma de

dinero para que lo colocara en el sistema financiero y le generara mejores rendimientos, lo cual se hizo en la empresa citada.

*"...Teniendo en cuenta en primer lugar, que según lo anotado, la "transferencia del dominio de los pagarés" como fue indicado, puede entenderse como la facultad de cobro en el señor Carlos Ruiz de los citados pagarés, aunado a que los entregados superan lo debido según el acta y no solo ello, sino el compromiso de trabajar en la reactivación de la empresa y lo más importante, que si dicho pago se considera como un resarcimiento de perjuicios por las relaciones con ESMAFLEX, es dicha empresa y no el demandado el obligado a sufragar dicho pago, máxime que entre los citados ESMAFLEX, CARLOS RUIZ y GLORIA PALACIO existían relaciones comerciales que según se indicó no fueron canceladas, lo que conlleva a concluir la falta de claridad en la obligación pretendida, por ende, no puede predicarse incumplimiento en tal sentido y si no hay crédito declarado en dicho documento que constituya una obligación pendiente de pago en cabeza del demandado, resulta imposible jurídicamente la existencia de un **título con mérito ejecutivo**, que sirva de fundamento y prueba suficiente para el éxito de las pretensiones del actor. En ausencia de tal título, la única opción jurídica es ordenar la cesación de la ejecución y como así no lo dijo el a quo, la decisión será revocada..."*

A pesar de los reparos a los que enfáticamente refiere el recurrente, en el trámite del proceso ejecutivo promovido por

la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, en contra del señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, que se adelanta ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, bajo el radicado No. 004-2008-00072; lo cierto es que, con independencia de esas censuras, la decisión de segunda instancia que viene de referirse, se encuentra en firme por estar debidamente ejecutoriada, no se puede mutar, variar o modificar porque se trata de una decisión definitiva, vinculante para las partes y para la jurisdicción y, que por lo mismo, hace tránsito a cosa juzgada; además, su desconocimiento dejaría de lado el principio de seguridad jurídica; al efecto, la Corporación decidió que el documento objeto de cobro carecía de mérito ejecutivo y fue proferida el 23 de julio de 2014; es decir, con anterioridad a la fecha de radicación de la presente demanda ejecutiva, 05 de mayo de 2017 y, de contera, del auto que libró mandamiento de pago, esto es, el 07 de junio de 2019; es decir, que desde antes de la presentación del libelo genitor y de la emisión de la orden de apremio, ya se había decidido por la jurisdicción que el contrato allegado como título adolecía de mérito ejecutivo; no siendo posible un nuevo juzgamiento sobre este tópico; se reitera, porque ya existe una sentencia debidamente ejecutoriada y que hace tránsito a cosa juzgada material, concluyendo que no presta mérito ejecutivo, no siendo posible seguir adelante con la ejecución como acertadamente lo coligió el Juzgador de primer grado.

Frente a este tópico, en relación con los efectos de la cosa juzgada, la jurisprudencia constitucional ha señalado:

*“La Carta Política, al ampliar el espectro de los derechos y garantías y al plasmar los mecanismos para su efectivo respaldo, dotó al orden jurídico de nuevos elementos que están destinados a fortalecer, lejos de debilitar el Estado de Derecho y los valores jurídicos esenciales que lo inspiran. Es inadmisibles que, por haberse instituido una figura como la acción de tutela, cuyo fin está exclusivamente relacionado con el amparo inmediato y cierto de los derechos ante situaciones no previstas por los medios ordinarios, se haya puesto fin a la vigencia de los postulados básicos en los cuales se ha fundado y desarrollado nuestra civilización jurídica. Uno de ellos es el principio de la **cosa juzgada**, que se traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las condiciones y requisitos previstos por la ley.*

“El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales.

*“La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la **seguridad jurídica**, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la*

definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces.

“Considera la Corte que no puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que garantice a la sociedad la certidumbre sobre el sentido último de las decisiones judiciales, o, como dice RADBRUCH, un "orden superindividual (...) para dotar prácticamente a la vida social de una instancia decisiva" [10], es decir, la plena conciencia en torno a que los juicios lleguen a su fin mediante resoluciones fijas y estables que precisen el derecho. La actividad de la jurisdicción no puede moverse eternamente en el terreno de lo provisional. El punto final, después de agotados todos los momentos procesales, se erige en factor insustituible de la convivencia, en cuanto implica la consolidación real del criterio de justicia.

“La introducción de elementos que desconozcan este postulado y que, por tanto, lesionen el valor de la seguridad jurídica, impide la vigencia del orden justo al que aspira la Carta Política tanto en el Preámbulo como en su artículo 2o., pues el logro de aquél exige momentos de definición judicial que otorguen al conglomerado la confianza en lo resuelto, sin el albur de nuevas y siempre posibles acciones que provoquen la indefinida reanudación de procesos nunca culminados.

“GUASP, para quien la cosa juzgada es "la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales", afirma la necesidad de esta institución en términos que comparte la Corte: "El ordenamiento procesal no puede renunciar a la institución de la cosa juzgada sin incurrir en

una contradicción esencial de sus bases. Cuando el derecho del proceso otorga fuerza a una decisión judicial es porque entiende que con ella la finalidad peculiar del proceso, la satisfacción de pretensiones, ha quedado alcanzada. Si admitiera luego la renovación integral del litigio tendría que destruir ese principio"[11]

*"La función estatal de administrar justicia lleva implícito el concepto de la **cosa juzgada** aún antes de su consagración en normas positivas, pues resulta esencial a los fines que persigue. Si es propio de la potestad atribuida al juez la capacidad de definir el derecho en el asunto materia de su competencia, sus facultades se actualizan y concretan en el momento en que resuelve y su resolución es vinculante.*

"La Corte Constitucional no podría compartir una interpretación jurídica en cuyo desarrollo se hiciera posible sacrificar el supremo valor de la justicia en aras de un orden o de una seguridad que no la realizaran, pero reconoce a estos valores, razonablemente entendidos, el carácter de presupuestos indispensables para que la justicia se haga realidad concreta en el seno de la sociedad. Así entendida, la seguridad jurídica no se contrapone a la justicia sino que se integra con ella.

"En este sentido, no está equivocado LEGAZ Y LACAMBRA cuando afirma que, si bien la justicia es un valor más alto que el orden y la seguridad, los cuales no pueden existir al margen de ella, tales valores son ontológica y ónticamente condicionantes de la justicia: "Sólo sobre la base de un orden

se puede hablar de justicia o injusticia en la sociedad; si ese orden no existe, entonces se puede hablar de ideas de justicia, pero no de justicia existente en las relaciones de la vida, pues desde el momento que se admite que la vida social está regida por la justicia, se presupone que existe un orden establecido precisamente por el Derecho en cuanto que es Derecho"[12].

"Mediante la observancia del principio de la cosa juzgada - cuyo carácter metapositivo hace que deba entenderse incluido en la Carta como intrínseco a los valores que la inspiran y la fundamentan[13]- se manifiesta la autoridad del Estado traducida en decisiones eficaces de los jueces, quienes administran justicia en nombre suyo. Como expresa COUTURE, "donde hay cosa juzgada hay jurisdicción y donde no hay cosa juzgada no existe jurisdicción", de tal manera que negar el principio es negar la función misma, pues la administración de justicia tiene concreción en la providencia por cuyo conducto el juez dice la verdad final sobre la controversia planteada, realizando en ese asunto la previsión general consagrada en el texto de la ley.

"Por otra parte, desde el punto de vista individual, las partes dentro de un proceso judicial buscan la definición acerca de sus pretensiones y, por tanto, la sentencia constituye para ellas objetivo de su actividad y normal culminación de sus expectativas.

*"La sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para la parte favorecida, un **título** dotado de plena validez y*

oponible a todo el mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a partir de la firmeza del fallo.

*“Debe distinguirse entre los conceptos que en la doctrina se conocen bajo las denominaciones de **cosa juzgada material** y **cosa juzgada formal**. La segunda hace que no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado dentro del mismo proceso y por los mismos hechos y fundamentos que motivaron tal resolución, mientras que la primera, también conocida como cosa juzgada **sustancial**, implica la absoluta inmutabilidad de la sentencia en firme, no ya dentro de un proceso determinado, sino ante cualquier otro proceso y en relación con cualquier motivo o fundamento, pues a ella se accede por el agotamiento de todas las posibilidades procesales y supone, por tanto, que la actividad jurisdiccional del Estado se desplegó íntegramente en relación con la materia debatida”* (CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-543 del 01 de octubre de 1992, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Se pasa a dilucidar las conductas dolosas del deudor y el acreedor del crédito objeto de la medida ejecutiva, a que se contrae el recurrente, para determinar si conllevan la responsabilidad para hacer efectivo su pago a cargo de la parte demandada.

Sobre el particular, se advierte que el Juzgado de primer grado, en el proceso ejecutivo que promovió el señor Gustavo Castro Valencia, contra la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, radicado No. 2006-00423-00, por auto del 09 de octubre de 2006, decretó el embargo del crédito a favor de la

demandada y a cargo del señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, en los términos del numeral 4º del art. 681 del C. de P. Civil; por oficio 1205-2006-00423, del 31 de agosto de 2007, requirió al señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, para que allegara los recibos de consignación del crédito embargado so pena de las sanciones de ley; en proveído del 26 de noviembre adiado, requirió nuevamente al señor Ruiz Castillo para que en el término de diez (10) días, procediera conforme con lo ordenado so pena de dar cumplimiento a la norma reseñada líneas atrás; por auto del 09 de abril de 2008, procedió a designar secuestre para que adelantara el respectivo proceso, conforme con el inciso 3º del numeral 4 del citado artículo; el 26 de julio de 2008, ordenó oficiar nuevamente al deudor Carlos Arturo Ruiz Castillo para que realizara las consignaciones de acuerdo con el art. 681-4 de C. de P. Civil; además, la parte demandante mediante escrito presentado el 26 de abril de 2007, solicitó al Juzgado la expedición de copia de algunas piezas procesales para presentar denuncia penal contra el señor Carlos Arturo Ruiz Castillo, por el posible punible de fraude a resolución judicial, las que se ordenaron el 04 de mayo adiado.

Se constata que el demandante en el proceso radicado No. 001-2006-00423-00, donde se originó este proceso ejecutivo conexo, antes de que el Tribunal profiriera la sentencia de segunda instancia en el proceso radicado bajo el No 004-2008-00172-00, el 23 de julio de 2014, y que en primera instancia se tramitó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, ya conocía la existencia de este proceso, como lo

pone de presente en el escrito fechado el 15 de mayo de 2014, donde indica:

"... muy respetuosamente pongo en conocimiento del despacho, como lo he venido manifestando a través de otros escritos, la conducta ilícita que viene desplegando la demandada señora Gloria Nelly Palacio Moreno, quien a sabiendas que el crédito personal con el cual viene demandado al señor CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO se encontraba embargado por su despacho desde el mes de septiembre de 2006.

"El proceso ejecutivo que adelanta la señora Gloria Nelly Palacio Moreno se encuentra radicado con el Nro. 00172 de 2008 en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Medellín, insisto, crédito que se encuentra embargado y debidamente notificado al deudor de esta medida cautelar y lo mas (sic) grave aún es la colusión pues el demandado, a sabiendas que dicho crédito se encuentra fuera del comercio, no propone excepción alguna a la demanda, ...

"Por las anteriores razones le pido muy comedidamente se oficie al Juzgado 4º Civil del Circuito de Medellín, para que dada la evidencia del fraude procesal en el cual vienen incurriendo las partes en el proceso que se tramita en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Medellín, se tomen las medidas correctivas compulsando copias de lo pertinente para que los entes encargados de estas conductas procedan a lo que es de su cargo e igualmente, PONGAN A DISPOSICIÓN

DE SU DESPACHO los bienes embargados y secuestrados de propiedad del señor CARLOS ARTURO RUIZ CASTILLO.

“Ahora bien si su despacho no comparte la anterior petición, le solicito DECRETE EL EMBARGO DE LOS REMANENTES QUE RESULTAREN DE AQUEL PROCESO o de los bienes que por cualquier circunstancia llegasen a desembargarse”.

Atendiendo la anterior solicitud, en auto del 10 de junio de 2014, el Juzgado de conocimiento decretó el embargo solicitado de remanentes; sin que en el plenario exista constancia, de que puso en conocimiento del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, que el crédito que allí se pretendía ejecutar, se encontraba embargado para el proceso ejecutivo radicado No. 001-2006-00423-00, que se adelanta en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí, con miras a que el Juzgado adoptara las decisiones que a bien tuviera, o incluso, el superior jerárquico una vez fuera apelada la sentencia, dado que tal información fue ocultada por las partes de dicho proceso; bajo estas circunstancias, el proceso simplemente continuó su trámite hasta el proferimiento de la sentencia de segundo grado reseñada líneas atrás, donde se restó mérito ejecutivo al documento base de recaudo; sin que ahora se pueda presentar reproche alguno frente a dicha actuación.

En torno a la responsabilidad que se puede derivar del deudor, a quien se le notifica el embargo de un crédito, el Nral. 4º del art. 681 del C. de P. Civil, vigente para el momento en que se

comunicó el embargo al señor Carlos Arturo Ruíz Castillo, prescribe: "**Para efectuar los embargos se procederá así:**

"4. El de un crédito u otro derecho semejante, se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que debe hacer el pago a órdenes del juzgado en la cuenta de depósito judicial. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquier persona que presencie el hecho.

"Al recibir el deudor la notificación, o dentro de los tres días siguientes, deberá informar bajo juramento que se considerará prestado con su firma, acerca de la existencia del crédito, de cuando se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiese comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquella, so pena de responder por el correspondiente pago y de incurrir en multa de dos a cinco salarios mínimos mensuales, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo.

"Si el deudor no efectúa el pago oportunamente, el juez designará secuestre quien podrá adelantar proceso judicial para tal efecto. Si fuere hallado el título del crédito, se entregará al secuestre; en caso contrario, se expedirá las copias que solicite para que inicie el proceso".

En efecto, con la entrega del oficio al deudor comunicando el embargo del crédito y la orden de que debe hacer el pago en la cuenta de depósitos judiciales y que está compelido a

informar al Juzgado que decretó la medida cautelar sobre la existencia del crédito, su monto, la fecha de exigibilidad, si con anterioridad se le ha comunicado otro embargo o si se le notificó alguna cesión o la aceptó, no se advierte que en este caso, se pueda dejar de lado la sentencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, para desconocer los efectos de la cosa juzgada; pues basta con advertir que el deudor no realizó allí el pago del crédito, como para pensar que desconoció el mencionado mandato de pagar en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado que le comunicó el embargo; en cambio, se reconoció a su favor una excepción que tuvo la virtualidad de enervar las pretensiones de la ejecutante.

El silencio del deudor sobre los hechos que debe informar al Juzgado, en caso de que así se le hubiera advertido en el oficio mediante el cual se le notificó el embargo del crédito y que le puede acarrear consecuencias, no incluye como sanción la pérdida de las garantías constitucionales, como la de acceso a la jurisdicción y el derecho a un debido proceso, para formular los medios de defensa que a bien tenga ante la instauración de un proceso ejecutivo en su contra para hacer efectivo el crédito objeto de la medida ejecutiva, máxime cuando no están incluidos dentro del catálogo de episodios que por mandato legal debe informar al estrado judicial que decretó la medida ejecutiva; de tal manera, que aun en el proceso ejecutivo que inicie el secuestre con miras a hacer efectivo el crédito embargado, puede proponer los medios de defensa que tenga a su alcance, como los que esgrimió ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín

y que terminó con la sentencia proferida por el Tribunal y que en lo pertinente viene de transcribirse.

Ahora, ante las omisiones de la señora Gloria Nelly Palacio Moreno, en dar las informaciones pertinentes al juzgado sobre el crédito embargado, o sobre las conductas dolosas de ésta bien a título personal y/o en confabulación con el deudor, a quien se le decretó la medida cautelar, no se desconoce que pueden causar perjuicios y dar lugar a indemnizaciones, cuya reparación puede ser demandada por los afectados ante el órgano jurisdiccional; pero estas son circunstancias diferentes al hecho de que el crédito embargado no se hizo efectivo; pues a la postre, no es exigible como en su oportunidad lo indicó la sentencia de segunda instancia aludida, la que no puede ser cuestionada ni desconocida por los efectos de la cosa juzgada, mientras que no sea invalidada mediante los mecanismos legalmente establecidos.

Finalmente y en relación con la solicitud del recurrente, para que se fijen los honorarios a que tiene derecho por su desempeño como secuestre, ya que el Juzgador de primera instancia omitió tasarlos, la Sala pone de presente que la solicitud no es de recibo porque el Juzgado de primer grado, es el competente y quien debe proceder a señalarlos y a determinar a quién corresponde su pago; bien cuando el auxiliar de la justicia haya finalizado la labor encomendada o una vez aprobadas las cuentas, si quien desempeña el cargo está obligado a rendirlas, como lo manda el art. 363 del Código G.P.

Conclusión: Acorde con lo anterior, se impone la confirmación de la sentencia de primer grado.

Se condenará al extremo activo a pagar las costas de segunda instancia a favor de la parte demandada. Como agencias en derecho causadas en esta instancia se fijará la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000.00), que equivalen a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (Acuerdo PSAA16-10554, del 05 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que serán liquidadas por el a quo conjuntamente con las de primera instancia.

IV. RESOLUCIÓN:

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

- 1.** Por lo dicho en la parte motiva se CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia indicada.
- 2.** Se condena al extremo activo a pagar las costas de segunda instancia a favor de la parte demandada. Como agencias en derecho causadas en esta instancia se fija la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS

(\$1.160.000.00), que equivalen a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (Acuerdo PSAA16-10554, del 05 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que serán liquidadas por el a quo conjuntamente con las de primer grado.

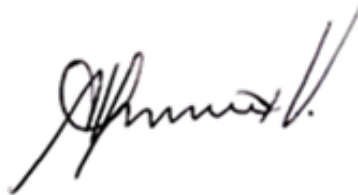
3. Devuélvase el expediente al lugar de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

Los Magistrados



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ